

SINTESIS REUNION INFORMATIVA APSEN SOBRE REGIMEN PREVISIONAL DEL S.E.N. 6/7/2018

Como fuera anticipado por Comunicación N° 34/2018, el día viernes 6 de julio se realizó la reunión informativa en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería. Ante una concurrencia que superó el centenar de afiliados y la participación del Presidente, Vicepresidente 1° y Secretario de la Comisión Directiva del APSEN.

El Presidente realizó una detallada exposición sobre el seguimiento del tema previsional del SEN desde julio-agosto del año pasado hasta el presente. Así mencionó el informe del Jefe de Gabinete al Congreso (agosto 2017) respondiendo a la pregunta de un legislador sobre el monto de algunas jubilaciones especiales como la del SEN y la del Poder Judicial.

Se hizo mención a la Ley 27.260 de julio de 2016 llamada de “Reparación Histórica Previsional”, que dispuso crear un Consejo de Sustentabilidad Previsional a fin de elaborar un nuevo régimen previsional dentro de los 3 años de la entrada en vigor de la ley, con el objeto de tender a dar sustentabilidad al sistema teniendo en cuenta las nuevas realidades existentes. La Comisión recién se conformó este año y deberá dar un informe a fines del corriente.

El 20 de noviembre de 2017 el diario Clarín publicó en primera plana los montos de las jubilaciones de los diplomáticos. El APSEN emitió la Comunicación N° 69/2017 en dicha oportunidad con argumentos refutando que se tratase de un régimen de “privilegio” siendo en cambio un régimen “especial”. También se convocó a una reunión el día 24 de dicho mes en la sede externa del APSEN. A partir de allí el seguimiento de noticias periodísticas sobre la temática se le encargó a la “Agencia Global News”, la que fue contratada al efecto.

El 27 de diciembre de 2017 se mantuvo una reunión con el Canciller y en el desarrollo de la misma expresó que el Presidente se había referido a las jubilaciones de los diplomáticos como “escandalosas”.

Ese mismo mes se tomó contacto con el Secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, quien expresó que había intención presidencial de hacer una

modificación del régimen previsional, dada la gran cantidad de regímenes existentes, entre ellos los llamados “diferenciales”, así como la existencia de 18 cajas provinciales, todo lo cual incrementaba el déficit del ANSES.

En febrero de 2018 el citado Secretario acercó algunos informes relativos a las jubilaciones del SEN como el referido a la tasas de sustitución que, siendo su número ideal el de 3 activos por cada pasivo, había sido en el año 2008 de 2.8 mientras que al 2017 había bajado a 1.8.

En el mes de marzo comienza un fuerte rumor, muy extendido entre los colegas, sobre la existencia de un DNU derogando el régimen salarial del SEN (Ley 23.797) por lo que se tomó nuevo contacto con el Secretario de Seguridad Social para ratificar o rectificar dicha información, a lo que respondió negativamente.

En mayo los diarios publicaron un artículo sobre los regímenes especiales por lo que se tomó un nuevo contacto con Paulucci quién informó que el Subjefe de Gabinete Gustavo Lopetegui le había encargado estudiar reformas a los mismos.

En dicho mes, el Secretario de Seguridad Social expresó que presentaría una propuesta al APSEN. A mediados de junio llega dicha propuesta, la que implicaba una derogación parcial de la ley 22.731 (**Anexo A**), ya que tocaba dos de los puntos esenciales de la misma (Artículos 4° y 6°). Dicha propuesta fue rechazada con escritos elaborados por los asesores del APSEN Dr. Jorge Cayo y Dr. Mario Pérez Talamonti (**Anexo B**). Asimismo, se entregó un paper preparado por el APSEN sobre las especificidades y restricciones de la carrera diplomática (**Anexo C**).

Luego del rechazo formulado por el APSEN del proyecto de Ley, el día 2 de julio el Presidente de la Nación, en reunión con el Ministro de Trabajo y el Secretario de Seguridad Social, aceptó dejar de lado el proyecto de derogación de la Ley 22.731, en la medida en que hubiera una reducción del diferencial entre lo que destina el ANSES al régimen especial del SEN para el pago de las jubilaciones y pensiones (124 millones mensuales) y el aporte de los activos (50 millones), siendo el diferencial 74 millones mensuales (**Anexo D**).

Finalizada la exposición del Presidente, más de una docena de participantes efectuaron comentarios y preguntas. Ya al final uno de los colegas presentes efectuó una propuesta consistente en que el APSEN analizara escenarios con cifras y luego volviera a convocar a otra reunión con el resultado de esos análisis. Lo que fue apoyado por los presentes.

COMENTARIOS QUE SURGIERON A PARTIR DE LAS PREGUNTAS

Hay un aporte que todos los activos estamos haciendo del 3% por la Ley 19.032 que no debemos “strictu sensu” realizar, pues los regímenes especiales están exentos de ello, debiendo entonces formar parte de un eventual aporte adicional al ANSES.

Los abogados trabajando en el tema son los Dres. Jorge Cayo y Mario Pérez Talamonti y el APSEN está en contacto con el constitucionalista Dr. Alberto Bianchi miembro de la Academia de Derecho y autor de varias obras de Derecho Público Constitucional y Administrativo.

Se requirieron mayores datos para analizar la situación y lo que están haciendo otros gremios. Se comentó que algunos sectores como el de Puertos y Embarcaciones (que abarcan 10 diferentes actividades) están pensando en elevar aportes.

Respecto a la posibilidad de que un proyecto que tomara estado parlamentario, no tuviera aprobación, se expresó que algunos legisladores consultados al conocer los montos de las jubilaciones del SEN manifestaron que, en las actuales circunstancias, la derogación del régimen jubilatorio del SEN se aprobaría sin dificultad y aceleradamente.

Se mencionó que, recientemente, periodistas han solicitado información (en el marco del Decreto de Acceso a la Información Pública) del listado de jubilados del SEN con nombres y apellidos, así como montos jubilatorios brutos y netos.

En cuanto a una pregunta referida a cómo plasmar un acuerdo de superación de aportes, se respondió que el APSEN es el único gremio del SEN, ya que ARSEN es una Asociación Civil. Por la ley de Asociaciones Sindicales y el propio Estatuto del APSEN éste representa tanto a los activos como a los

pasivos, sean o no, inclusive, asociados al APSEN. En ese sentido se aclaró que se plasmaría en un Convenio de Corresponsabilidad (Secretaría de Seguridad Social-ANSES-APSEN).

En relación a los aportes de los funcionarios pasivos del SEN, se mencionó que no es una nueva modalidad, ya que en los regímenes de las FF.AA. y de Seguridad, así como en cajas jubulatorias propias como la del Banco Provincia, los pasivos aportan para sostener el régimen jubulatorio, entre un 10% y un 15%.

Otro colega planteó la posibilidad de pensar en un “mix”, esto es aumentar aportes pero también edad jubulatoria hasta los 70 años para todos, o 75 para Embajadores, con un decrecimiento porcentual de la jubilación (85% a 65-70% si se jubila a los 65 años). Lo que desde otro punto de vista significa “premiar” la permanencia. Se le respondió que se pensó proponer la extensión de la edad, pues es lo que en todos los países los previsionistas están aplicando, ya que extendiendo la vida activa se aumentan los aportantes dando sustentabilidad al sistema.

También hubo una pregunta sobre el cálculo del monto del aporte, si lo harían solo los activos o también los pasivos, así como si sería el mismo porcentual para todos o escalonado. Se le respondió que, como se dijera, aportarían tanto activos como pasivos (en diferentes porcentuales) y dentro de los activos serían también aportes diferenciales según el rango.

Respecto a la posibilidad de la derogación del Régimen Salarial del SEN, en cuanto a si corría peligro o qué sucedería si se modificara, se mencionó que de modificarse reduciendo los sueldos, se atacaría jurídicamente, como cuando fue el descuento de Machinea del 13% que la Corte Suprema lo declaró inconstitucional y tuvo que ser que devuelto con intereses.

En cuanto a la posición del Canciller sobre la actual situación, se comentó que el mismo había pedido una reunión especial con los Presidentes del ARSEN y del APSEN, la que tuvo lugar a fines de mayo, para manifestar su preocupación e instar a presentar alternativas, ya que veía en serio peligro la subsistencia del Régimen Especial de la ley 22.731.

Ante una pregunta relacionada con la voluntariedad del posible aporte, se explicó que la representación gremial del APSEN es de a la totalidad de los funcionarios activos y pasivos del SEN. Por lo que, el posible Convenio que se firmaría obligaría a todos los miembros del SEN por igual. La caracterización del aporte como “voluntario” es porque este no estaría fijado por ley, y la contraprestación sería mantener incólume el régimen jubilatorio actual. Asimismo, se destacó que el eventual aporte voluntario es deducible del impuesto a las ganancias.

En relación a consultas vinculadas al monto que aporta el SEN en concepto de impuesto a las ganancias, se explicó que se aporta 42 millones mensuales. Asimismo, se agregó que el 20% de esa cifra se destinaba al ANSES hasta fines del año pasado, pero con la reforma fiscal dejó de ir al ANSES y este se nutre de porcentuales de otros impuestos.

Finalmente se levantó la reunión para otra próxima a fin de estudiar escenarios numéricos factibles a ser presentados en una próxima reunión.

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO...
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:

ARTÍCULO 1°.- Modifícase el inciso b) del artículo 3° de la Ley N° 22.731, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“b) Computare treinta (30) años de servicios, de los cuales VEINTE (20) como mínimo fueren prestados en forma efectiva como funcionario del Servicio Exterior de la Nación en alguno de los cargos enunciados en el artículo 1°. A los fines de este inciso, se incluirán en el cómputo de los servicios cumplidos en forma efectiva en el Servicio Exterior de la Nación aquellos desempeñados en organismos internacionales cuando la designación se efectúe, conforme lo expresado en el artículo 49, inciso e) y artículo 50 de la Ley N° 20.957, solamente para aquellos funcionarios que en la oportunidad de su nombramiento tuvieron la categoría de embajador extraordinario y plenipotenciario de primera o segunda clase.”

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyase el artículo 4° de la Ley N° 22.731, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 4°.- El haber de la jubilación ordinaria será equivalente al ochenta y cinco por ciento (85 %) del promedio de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas durante el período de CIENTO VEINTE (120) meses inmediatamente anteriores a la cesación del servicio.

Se considerarán únicamente las remuneraciones en moneda argentina que correspondan a las categorías sobre cuyo promedio se determine el haber, en todos los casos como si esas categorías se hubieran desempeñado en el país.”

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyase el artículo 6° de la Ley N° 22.731, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 6°.- El haber de las jubilaciones y pensiones a otorgar de conformidad con la presente será móvil. La movilidad se efectuará de acuerdo a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 24.241.”

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyase el artículo 7° de la Ley N° 22.731, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 7°.- El aporte personal correspondiente a los funcionarios mencionados en el artículo 1° será el que rija en el Sistema Integrado Previsional Argentino incrementado de acuerdo a la siguiente escala:

<i>Desde el año 2019</i>	<i>2%</i>
<i>Desde el año 2020</i>	<i>3%</i>
<i>Desde el año 2021</i>	<i>4%</i>
<i>Desde el año 2022</i>	<i>5%</i>

“

ARTÍCULO 5°.- Incorpórase como artículo 7° bis de la Ley N° 22.731 el siguiente:

“ARTÍCULO 7° Bis.- Fíjase una contribución solidaria de SEIS PUNTOS PORCENTUALES (6%) sobre el monto del haber bruto que perciban los beneficiarios de la presente cuyas altas se produzcan a partir del año 2020.”

ARTÍCULO 6°.- Modifícase el artículo 8° de la Ley N° 22.731, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 8°.- La prestación de servicios en los destinos considerados como peligrosos o insalubres no será computada doble a los fines de acreditar el requisito de VEINTE (20) años en el Servicio Exterior de la Nación, exigido en el artículo 3º, inciso b), párrafo primero.”

ARTÍCULO 7°.- Modifícase el artículo 10 de la Ley N° 22.731, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 10.- Las jubilaciones de los agentes del Servicio Exterior de la Nación que no reunieren los requisitos establecidos en el artículo 3º incisos a) y b), o en su caso en el artículo 5º, y las pensiones a sus causahabientes se regirán por las normas generales establecidas en el Sistema Integrado Previsional Argentino.

No podrá acogerse a los beneficios de esta ley quien perciba una prestación previsional de un organismo internacional.”

ARTÍCULO 8°.- La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO.

CONSIDERACIONES DEL APSEN RESPECTO DEL BORRADOR DEL PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LEY 22731

De la lectura del proyecto recibido se concluye que el mismo constituye una indudable derogación del régimen jubilatorio específico creado por la Ley 22.731 y un evidente encuadramiento, con pequeñas diferencias, de los funcionarios diplomáticos de carrera en el régimen general de jubilaciones de la Ley 24.241.

Lo expresado es así por cuanto bajo el subtítulo “Modificación de los parámetros del régimen” se modifican de manera sustancial dos elementos que constituyen la columna vertebral del mismo.

El primero de ellos se refiere a la base de cálculo del haber inicial de pasividad (art. 4) que el proyecto determina que “...será el equivalente al ochenta y cinco (85%) del promedio de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas durante el período de CIENTO VEINTE (120) meses anteriores a la cesación del servicio...”, en lugar del 85% de la remuneración asignada a la categoría de mayor jerarquía desempeñada en el Servicio Exterior de la Nación durante un período de cuatro años, que es el procedimiento actualmente vigente.

El restante es la modificación del régimen de movilidad, que en la legislación vigente establece “...La movilidad se efectuará cada vez que sufra variación la remuneración asignada a la categoría que se tuvo en cuenta para determinar el haber de jubilación.” (art. 6°).

A los fines de la movilidad en el proyecto en estudio se consagra la total incorporación de los diplomáticos jubilados y pensionados en el régimen general de la Ley 24.241, ello es así por cuanto precisamente el nuevo art. 6° dice que “El haber de las jubilaciones y pensiones se efectuará de acuerdo a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 24.241”, es decir teniendo en cuenta en un 70% el Índice de Precios al Consumidor del INDEC y en un 30% la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPE).

Se advierte que los autores del proyecto de reforma consideran que “el escenario de derogación del régimen” específico de los funcionarios diplomáticos de carrera “es altamente conflictivo y con elevada probabilidad de ser declarado inconstitucional” y lo cierto es que bajo el eufemismo de expresar que se propone una “modificación de parámetros”, se reitera que, en realidad, se producirá una indudable derogación del régimen de que se trata.

Va de suyo que esa derogación encubierta derivará en una notoria litigiosidad debido a que los funcionarios en actividad reclamarán por los aportes jubilatorios que sobre el tope previsto en el régimen general han debido realizar durante todos los años que en cada caso será determinado.

Sobre el particular es importante recordar que los diplomáticos de carrera están obligados a efectuar sus aportes previsionales calculados sobre el total bruto de los haberes, por lo que si

se han visto obligados a efectuar esta contribución especial a un régimen especial para precisamente obtener una jubilación de ese tipo, es natural esperar que frente a una derogación y/o modificación sustancial de los parámetros que lo informan, reclamen la restitución de las sumas retenidas en más durante el período de vigencia del mismo.

Por último, como efecto colateral, vale agregar que ante una eventual modificación de la Ley especial, que setenta funcionarios que se encuentran con requisitos cumplidos para jubilarse, harán efectiva esta acción de forma inmediata. Veinte de estos funcionarios se encuentran prestando funciones en el exterior de los cuales la mayoría son Jefes de Misión, por lo que acarrearán un considerable costo adicional a la Administración que deberá afrontar sus traslados correspondientes como el de sus reemplazos y significará, lo que es peor, una “decapitación” de los más altos cargos jerárquicos de la carrera, tanto en el exterior como en el país.

Pero lo más sustantivo desde el punto de vista político será la destrucción de una carrera que ha costado años consolidar y que ha logrado convalidar la inserción de la República Argentina en el mundo con profesionales altamente especializados y una representatividad Federal creciente en su integración.

Los derechos adquiridos, la propiedad de las cotizaciones y la cuestión de los aportes sin tope.

La cuestión de la propiedad de los aportes, y las características de ese derecho, tiene estrecha vinculación con la noción misma de derecho adquirido.

Sobre la cuestión de las cotizaciones y la propiedad de las mismas, se ha dicho que el patrimonio que administra un organismo previsional, es un patrimonio social de afectación, y si no se lo protegiera, sería en desmedro de los restantes beneficiarios y aportantes al sistema, ya que, “en cualquier sistema económico-financiero de seguridad social se debe afirmar que los propietarios del dinero y responsables de su administración son quienes aportan y quienes en virtud de esos aportes luego serán beneficiarios. En los sistemas contributivos -reparto- son los sujetos de la seguridad social quienes aportan a su financiación con el fin específico nacido de la ley y de la propia intencionalidad de los aportantes, otro fundamento lo constituye el hecho que los que efectúan el aporte son los miembros de la sociedad, y por último, se basa también en el hecho de la concepción social del riesgo. La razón ética de la existencia de los fondos de la seguridad social es la “solidaridad social” y también la práctica de la virtud social que es la “justicia social”, -de ciertas formas de sociedades intermedias o del estado- también es un patrimonio social de afectación que debe ser aplicado exclusivamente para dicho fin con sólo la utilización adecuada de lo que requiera su administración”.

Por ello se puede afirmar que la propiedad de los aportes efectuados a un sistema de estas características no es de los afiliados aportantes. El aporte está destinado a financiar un

régimen sobre previsión, y es por eso, propiedad de la ANSES que atienden el pago de los beneficios.

Esto ha sido ratificado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, “...el hecho de efectuar aportes no genera ni un derecho de propiedad que permita al afiliado disponer de las sumas ingresadas en tal concepto, ni un derecho correlativo a obtener un beneficio por la sola circunstancia de haber padecido la retención, ya que la constitución legal del fondo de las cajas previsionales, está conformada con el producto del descuento forzoso sobre los sueldos cuyo destino es el de posibilitar el cumplimiento de los fines para los cuales las cajas fueron creadas.

Si alguna duda pudo generarse en los primeros años de vigencia del régimen de capitalización creado por la Ley N° 24.241, con el paso del tiempo quedo claramente establecido que los aportantes afiliados a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), solo tenían un derecho de dominio imperfecto sobre los aportes efectuados a la cuenta de capitalización individual.

Sin perjuicio de ello, a partir de la eliminación del régimen de capitalización individual y el traspaso de los aportes a la ANSES, se efectuaron planteos por parte de afiliados a las AFJP tendientes a la restitución de los mismos, y se ha resuelto, que es inconstitucional el art. 7 de la Ley N° 26.425 en cuanto establece el traspaso del saldo voluntario existente en la Cuenta de Capitalización Individual a la ANSES, en tanto resulta lesivo a los derechos amparados por los arts. 14 bis tercera parte y 17 de la Constitución Nacional, pues tales sumas son de propiedad del afiliado titular, quien las ha depositado con la finalidad de obtener en el futuro un beneficio previsional.

Distinguiendo entre estos aportes y los obligatorios, el Dr. Fasciolo en su voto dice: “Desde ya, considero apropiado remitir a esos precedentes por razones de celeridad y economía procesal y, sobre esa base, encuentro oportuno destacar que, a mi juicio, resulta a todas luces manifiesta la distinta naturaleza jurídica de los aportes obligatorios y voluntarios. Los primeros fueron establecidos por la ley coercitivamente en base al principio de solidaridad previsional (sea que estos hubieren sido dirigidos al régimen de reparto o al de capitalización), lo que en ocasiones justifica su exigencia sin derecho a devolución aunque no se tenga acceso a una prestación, cuando esa privación resulta de circunstancias personales del propio afiliado (como ser la falta de edad o años de servicios y aportes exigidos o del incumplimiento de cualquier otro requisito legalmente establecido, conf. doctrina de fallos 319:2177 y del dictamen de Fallos 328:33).

Respecto a los voluntarios, se indica que fueron previstos por el legislador como facultativos o libres, y sólo admitidos en el régimen de capitalización, lo que excluye toda posibilidad de asimilación a los obligatorios. Sobre ellos su titular goza de un derecho de propiedad, por lo que deben ser devueltos, cuando se han modificado las condiciones a las que adhirió al momento de efectivizarlos.

La naturaleza de los aportes voluntarios guarda estrecha relación con los aportes que sobre el total de la remuneración bruta percibida están obligados a efectuar los funcionarios diplomáticos de carrera.

Recuérdese que los aportes sin la limitación del tope constituye una de las características diferenciadoras del régimen jubilatorio creado por la Ley 22.731, lo que vale para concluir que en el hipotético supuesto de que se produzca la derogación o modificación sustancial de la ley va de suyo que corresponderá brindarle una solución a la situación disvaliosa que se plantearía derivada de la circunstancia de haber alimentado con mayores aportes a un régimen que quedaría sin efecto.

Por ello es importante tener en cuenta reiterados fallos emitidos por la Justicia de la Seguridad Social en reclamos formulados por funcionarios del Poder Judicial de la Nación, al amparo de la Ley 24.018.

La Ley 24.018 es la que estableció el régimen jubilatorio, entre otros, de los jueces de la Nación y por resolución del Consejo de la Magistratura, luego declarada inválida, se otorgó el mismo tratamiento a otros funcionarios del Poder Judicial de menor jerarquía, quienes se vieron por ello obligados a realizar los aportes previsionales sin tope.

La anulación de dicha equiparación motivó que se decidiera el cese inmediato del descuento a los jefes de despacho del aporte personal previsto en el art. 31 de la ley 24.018; la modificación del monto de los aportes para ese cargo con arreglo a la pauta del art. 11 de la ley y el **reembolso de las sumas retenidas en demasía** durante el período de vigencia de la resolución anulada.

En relación a lo expresado en el párrafo anterior, se destaca que en el caso del Servicio Exterior, para el mes de mayo 2018, la suma retenida por encima del “techo” del 11% de aportes, ascendió a casi 11 millones de pesos.

La carrera del Servicio Exterior de la Nación Ley 20.957 – vinculación con Sistema previsional Ley 22.731

Es necesario señalar, en primer lugar, que a partir de una interpretación armónica de las disposiciones que rigen la carrera del SEN en servicio activo y su correspondiente situación de retiro (conf. art. 2º Ley N° 20.957), debe ser efectuada teniendo en consideración distintos aspectos que hacen a la correcta aplicación de la normativa, poniendo en el ejercicio de la tarea interpretativa especial cuidado en no desnaturalizar el espíritu de las normas de organización de la carrera, de las facultades de la autoridad política responsable de la Cancillería y de los derechos previsionales de los integrantes del Cuerpo Permanente del SEN.

La Carrera del Personal del SEN está imbuida de innumerables particularidades que hacen a la esencia propia de la representación diplomática de los intereses de la República en diversos

lugares del mundo, entre los que podemos nombrar el hecho del desarraigo que produce tanto en el Funcionario del SEN como en toda su familia directa (esposa/o e hijas/os), teniendo prohibición absoluta de desarrollar otras actividades y encontrándose vedado además para su familia determinadas actividades, sin perjuicio de que de por sí el desarraigo producido por los cambios de destino.

Por ello, el sistema previsional que asegura que una vez cesado en la carrera y cumplido todos los requisitos de la Ley 22.731 (30 años de servicio/15 continuos o 20 discontinuos dentro del servicio exterior y la edad de 65 años como mínimo), gozarán de un beneficio previsional que mantendrá el status de vida familiar que ha visto vedado su desarrollo en otros ámbitos productivos para financiar la vejez.

Así, de modificarse el sistema el sueño de cientos de jóvenes con vocación de servicio, luego de una serie de etapas que superar, con pruebas tan exigentes que la mayoría debe dar un paso al costado, perderá uno de los principales incentivos para mantener el alto nivel profesional de los Funcionarios.

La Cancillería es uno de los pocos -si no el único- bastión de la Administración Pública Nacional con ingreso meritocrático a través de concursos públicos. El examen de ingreso del Instituto de Servicio Exterior de la Nación (ISEN) es el portal a través del cual se da comienzo a la carrera, siempre teniendo presente que la condición previa es que cuente con una carrera universitaria no menor a cuatro años y dominio certificado de idiomas.

Los estudiantes que logran atravesar el examen de ingreso se convierten oficialmente en aspirantes becarios del curso de formación del ISEN, con un nivel de dedicación full time, y un estipendio mensual que alcanza el 65% del sueldo bruto del escalafón más bajo de la jerarquía diplomática, el alumno deberá salir airoso en materias como historia, derecho, política y economía internacional, ceremonial de Estado, protocolo, y practica diplomática y consular, entre otras.

Ya graduado estará en condiciones de asumir el primer reto diplomático como secretarios de embajada o cónsul de tercera clase. El destino que se le asigne al aspirante dependerá de su área de formación de grado, del orden de mérito y de las necesidades del "servicio". El régimen de asignación de funciones es muy similar al que establecen las Fuerzas Armadas. El que ingresa en esta carrera, no puede negarse a ser trasladado a un destino, y si lo hace, pueden dejarlo cesante por incumplimiento de las obligaciones de sus funciones.

En un mundo globalizado en el que los países y sus ciudadanos están en continuo contacto e intercambio, la diplomacia se ha transformado en una profesión clave para entablar relaciones adecuadamente. La misión básica es representar al país y promover sus intereses, fueren éstos económico-comerciales, culturales, políticos, como defender y proteger los intereses de los connacionales que se encuentren en el país en el cual se está acreditado.

Por ello, los Funcionarios del SEN además de su formación académica previa y la propia del ISEN, generan su propia capacitación a través de las distintas experiencias en los cargos que van desempeñando durante su extensa carrera, por lo que los más cercanos a la edad jubilatoria, son los que poseen la mayor capacidad para desempeñar adecuadamente las funciones que les son encomendadas.

Reiteramos que una amenaza de modificación de la forma de cómputo de su haber previsional provocaría casi inmediatamente una ola de renunciaciones y pedidos de jubilación que ocasionaría serios perjuicios a todo el Servicio Exterior de la Nación; además de los costos consiguientes como por ejemplo:

- Gastos de traslados de todos los funcionarios renunciando desde sus destinos actuales hacia el país.
- Incremento del número de jubilados y merma considerable en los activos y mayores aportantes al régimen especial.
- Nombramientos de reemplazos con categorías superiores a las que revistan por asumir funciones superiores y sus consiguientes gastos de traslado que duplicarían los citados anteriormente.
- Vaciamiento de los escalones superiores y mas capacitados del SEN.
- Aumento de la litigiosidad tanto de los pasivos que verían modificado el cálculo de sus movibilidades como de los activos que aportaron durante muchos años dentro de un régimen con la promesa de su mantenimiento a futuro (en Especial hay que considerar el pago de las deudas por aportes y contribuciones patronales que correspondían en el periodo 1994-2007 hasta el traspaso de todos los Funcionarios del SEN al Régimen Especial). Ello se formalizó a través del Acuerdo Marco N° 10/09 que obligo al pago del total de las diferencias existentes entre los periodos julio de 1994/abril de 2007 e instrumentando un plan de facilidades de pagos hasta 60 cuotas con intereses de financiación.

En este último aspecto, es necesario señalar también que aquellos que tengan los años de servicios necesarios para acogerse a la jubilación pero no hayan llegado a la edad requerida, resultarán los más perjudicados y serán una gran fuente de litigios previsionales y contra el Estado Nacional por la responsabilidad en el cambio de las reglas.

Así, el art. 22 inc. n) de la ley N° 20.957 establece como derechos del personal del SEN “Percibir los haberes correspondientes a su jubilación o retiro y dejar pensión para sus derechohabientes”.

Las consecuencias que sobre la realidad objeto de regulación jurídica se deriven de la elección de una u otra significación de una norma, constituyen un elemento de importancia para el análisis, que el intérprete no debe soslayar en su tarea hermenéutica. En materia de interpretación de las leyes debe optarse por aquélla que, además de favorecer la validez de la norma, reporte el resultado más justo y adecuado a las exigencias de la materia social regida

por la norma analizada: la exégesis de las leyes debe efectuarse con la máxima prudencia cuando está en juego un derecho subjetivo. Dict. N° 193/99, 25 de noviembre de 1999. Expte. N° 143950/99. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (Dictámenes 231:237).

Sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las leyes previsionales deben interpretarse conforme la finalidad que en ellas se persigue (Fallos: 267:19 -La Ley, 126-457), cuidando que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (conf. Fallos: 266:107), no resultando procedente la aplicación de tales normas con carácter restrictivo, pues no debe llegarse al desconocimiento de derechos de esa índole sino con extrema cautela (conf. Fallos: 266:202, 266:299, 278:273 entre otros).

Debe hacerse mención respecto del régimen que instituía para los miembros del Servicio Exterior de la Nación de acuerdo a lo establecido en el art. 74 y siguientes de la Ley 20.957, que remitía a las normas generales para los agentes de la Administración Pública Nacional.

Es en 1983 que comienza un nuevo período de creación de regímenes especiales, ahora ya no mediante la incorporación a la ley 18.464, sino constituyéndose cada norma en un régimen propio. Es así que se dicta la ley 22.731 que crea el Régimen Previsional para los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, entre muchos otros posteriores como los de las leyes 22.929 y 22.955.

En todas estas leyes dictadas desde el año 1983 hasta 1990 los requisitos de edad y servicios no resultaban menores a los del régimen general. Su “ventaja” se encontraba dada por la posibilidad de obtener un haber jubilatorio que representaba un importante porcentaje de la remuneración del último cargo (no de un promedio de remuneraciones) y –fundamentalmente– por la movilidad posterior de este haber, reglada por la propia remuneración del cargo y no por los aumentos generales que se otorgaban a los haberes de las actividades comunes (generalmente inferiores).

La mayoría de los regímenes especiales fueron derogados al 31 de diciembre de 1991 por la ley 23.966, que además creaba una Comisión Bicameral que tendría por objeto “proponer un régimen general de jubilaciones y pensiones”.

Es esta Comisión Bicameral la que propone la sanción de cuatro normas, entre las cuales se encuentra la referida al tema que estamos tratando.

Se dictan entonces las leyes 24.016 [docentes], 24.017[regímenes diferenciales o insalubres], 24.018 y 24.019. Esta última es la que, en lugar de crear nuevos regímenes, restablece –entre otras– la Ley 22.731 para los Funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.

Es con este panorama que llegamos al año 1993, en que se dicta la ley 24.241, creadora del nuevo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

El Poder Ejecutivo Nacional en un claro exceso reglamentario interpreta la derogación de los regímenes previsionales vigentes a esa fecha, no derogados expresamente por dicha ley, lo que ha generado un gran debate y confusión.

En efecto, la ley 24.241 es clara en derogar en forma expresa el régimen general de la ley 18.037, así como en mantener la vigencia de los regímenes “diferenciales”. Sin embargo, esta claridad no existe respecto de los regímenes especiales vigentes a 1993, hasta aquí reseñados (ley 24.016, 24.018, 22.731 y 22.929).

En el mes de Enero de 1994 (antes que entrara en vigencia el nuevo régimen previsional mixto instituido por la ley 24.241) el Poder Ejecutivo Nacional dicta –como “de necesidad y urgencia”- el Decreto 78/94, por el que establece que “ ... a partir de la fecha de entrada en vigencia del Libro I de la ley 24.241 ... quedarán derogados los siguientes regímenes de jubilaciones y pensiones ... : ley 22.731, leyes 22.929, 23.026 y 23.626, ley 24.016 y ley 24.018 ...”.

Esta interpretación reglamentaria operó la derogación al 14 de julio de 1994, fecha de entrada en vigencia del citado Libro I de la ley 24.241. Tal interpretación contraría el principio según el cual la ley general no deroga a la ley especial anterior salvo expresa abrogación o manifiesta incompatibilidad, situación que no se configura en el caso (Fallos: 305:353; 315:1274).

A partir de entonces, se ha producido una importante cantidad de presentaciones judiciales, tendientes todas ellas, por distintos medios –amparos, acciones meramente declarativas, acciones impugnatorias de resoluciones denegatorias de la ANSES, acciones cautelares autónomas, etc.- a obtener la declaración de inconstitucionalidad de este Decreto 78/94 y la declaración de vigencia de los regímenes de las leyes 22.731, 22.929, 24.016 y 24.018, por no resultar derogadas por la ley 24.241.

Este criterio se ve confirmado por el tratamiento parlamentario dado a la propuesta de supresión de estatutos especiales enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso en el año 2002 (Mensaje 535 del 25 de marzo de 2002), que incluía a la ley 22.731 entre las normas a ser derogadas y que concluyó con la sola eliminación de las jubilaciones para los funcionarios políticos de los poderes legislativo y ejecutivo, dado que el 23 de octubre de 2002 se sancionó la ley 25.668 que derogó –entre otras- a la ley 22.731, sin embargo con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2322/02 que observó gran parte de la referida ley 25.668 en el sentido de considerar vigente aquella (ley 22.731).

Por los avatares acaecidos a partir del mensaje N° 535, es que claramente la Ley 22.731 nunca perdió vigencia y así lo expuso la Procuración del Tesoro de la Nación con anterioridad en Dictámenes 231:237, ratificado posteriormente en Dictámenes 234:319.

Fue a partir de dicha circunstancia que ANSES modificó su criterio, considerando vigente el régimen jubilatorio específico previsto para el personal diplomático de carrera por la Circular

GP N° 09/04 del 3 de marzo de 2004. En ella estableció el procedimiento para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, la que fue reemplazada por su similar N° 14/08 y modificada por la N° 28/08, luego sustituidas por otras Circulares pero sin variar la esencia de la vigencia absoluta del régimen.

La cuestión se entendió totalmente resuelta por la Secretaría de la Seguridad Social, mediante el dictado de la Resolución SSS N° 135/07, que estableció que los afiliados que se encuentren comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley N° 22.731 no pueden realizar la opción que prevé el artículo 30 de la Ley N° 24.241 (texto según Ley N° 26.222), ni destinar sus aportes al Régimen de Capitalización Individual, tal como fuere expuesto en la Resolución 873/06 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, debiendo los mismos ser derivados a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para financiar las prestaciones de su competencia. Parcialmente esta cuestión luego ya se tornó abstracta a partir del 9 de diciembre de 2008, cuando entró en vigencia la Ley 26.425 que crea el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y deroga el sistema de capitalización, entre otras cuestiones.

El personal del SEN regido por las leyes 20.957 y 22.731, al igual que aquellos amparados en otros regímenes, inclusive hoy derogados, se encuentra legalmente excluido por tratarse de personal que no se halla dentro del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, por pertenecer a un sistema de ley especial.

Así lo ha expresado la Procuración del Tesoro de la Nación al referirse al personal que posee regímenes especiales en Dictámenes 250:240 y 244:079, en los cuales en términos generales, se efectuó un detenido análisis acerca de la obligatoriedad de efectuar los aportes y contribuciones previstas en la Ley N° 19.032 (B.O. 28-5-71), situación ésta que alcanza a los trabajadores activos y pasivos en relación de dependencia y autónomos, que se encontraran comprendidos en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones de las Leyes N° 18.037 (t.o. por Resolución N° 522/76, B.O. 1-7-77) y N° 18.038 (t.o. por Resolución N° 192/80, B.O. 25-4-80) y los incluidos en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), estatuido por la Ley N° 24.241.

Por último la especialidad del régimen también encuentra sustento en que los activos y los pasivos forman un solo Cuerpo Permanente del Servicio Exterior, en idénticas condiciones a lo que sucede con los regímenes Policiales o de las Fuerzas Armadas, por los que pueden ser convocados al servicio activo los funcionarios del cuerpo permanente pasivo del SEN, lo que se encuentra contemplado en el inciso s) del artículo 21 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nro. 20.957.

En efecto, la mencionada norma establece que: “Cuando por necesidades del servicio sean convocados por el Poder Ejecutivo los funcionarios del cuerpo permanente pasivo, deberán presentarse a prestar servicios, quedando sujetos –salvo dispensa expresa- a las obligaciones, limitaciones e incompatibilidades de los funcionarios en actividad”.

Desde el marco de la ley 22731, la convocatoria mencionada precedentemente, encuentra su encuadre reglamentario en el artículo 13 de la Ley Nro. 22.731 (BO, 08/02/1983), por lo que no cabe duda que ambas normas integran un sistema normativo que rige no solo la carrera del activo sino la conformación total de un solo Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación.

Dicha normativa se encuentra plenamente vigente: no existe duda alguna de ello dado que cuando el Congreso Nacional sancionó la Ley 25.668 pretendiendo derogar todos los regímenes especiales, lo que fue parcialmente observada por el Poder Ejecutivo, mediante el dictado del Decreto N° 2322/02, incluyendo dentro del veto la pretendida derogación de la Ley 22.731.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido acerca de la vigencia del régimen especial del servicio exterior de la Nación en los autos “Siri, Ricardo Juan c/ ANSES” del 9/8/05, señalando que “los beneficios establecidos para funcionarios superiores del servicio exterior de la Nación han quedado sustraídos del ámbito de las referidas leyes 24.241, 24.463 y han conservado la movilidad que es propia de la ley 22.731, por constituir un estatuto específico y autónomo...”.

Tal es la especialidad del sistema de la carrera del SEN que los aportes previsionales efectuados durante la convocatoria no se destinan al “Fondo de Desempleo”, como es propio de la Ley 24.241 (Ley General de Jubilaciones Y Pensiones) y no de la Ley Especial (22.731) que computa los años para la antigüedad total de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.

Como ya expresara, la norma vigente claramente establece cual es el correcto proceder sobre el tema que nos ocupa, por lo que es necesario remitirse al Art. 13 de la Ley 22.731 (que fija el régimen jubilatorio del SEN) que reza:

“Los funcionarios que hubieren obtenido la jubilación de acuerdo con el régimen de esta ley, podrán ser convocados por el Poder Ejecutivo para desempeñar con carácter de carga pública, cargos, funciones o misiones en el Servicio Exterior de la Nación de los cuales no podrán excusarse, salvo razón atendible a juicio del Poder Ejecutivo.

El reintegro al servicio activo en forma transitoria o permanente, entraña el derecho a percibir la retribución propia del cargo en el que fueren designados, suspendiéndose, a partir del momento en que les asista ese derecho, la liquidación del haber jubilatorio.

Los servicios prestados y las remuneraciones percibidas en estas condiciones, les serán computables en el momento en que cesen en el desempeño de sus funciones para volver a acogerse a los beneficios de la presente ley.”

Como surge de su lectura, la exegética del mismo no da lugar a ambigüedad interpretativa alguna.

La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho que “En materia de interpretación de las leyes debe optarse por aquella que, además de favorecer la validez de la norma, reporte el resultado más justo y adecuado a las exigencias de la materia social regida por la norma analizada: la exégesis de las leyes debe efectuarse con la máxima prudencia cuando está en juego un derecho subjetivo. Dict. N° 193/99, 25 de noviembre de 1999. Expte. N° 143950/99. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (Dictámenes 231:237).

En igual sentido sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las leyes previsionales deben interpretarse conforme la finalidad que en ellas se persigue (Fallos: 267:19 -La Ley, 126-457-), cuidando que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (conf. Fallos: 266:107), no resultando procedente la aplicación de tales normas con carácter restrictivo, pues no debe llegarse al desconocimiento de derechos de esa índole sino con extrema cautela (conf. Fallos: 266:202, 266:299, 278:273 entre otros).

En virtud de las consideraciones expresadas, el proyecto de modificación del régimen previsional resultaría altamente conflictivo y ocasionaría graves inconvenientes a la carrera, no logrando ningún objetivo concreto respecto de la reducción del déficit existente entre el aporte y las contribuciones de los activos con relación al pago de las prestaciones previsionales de los que se encuentran en pasividad.

Por todo lo precedentemente expuesto y con el fin de evitar una alta y costosa litigiosidad, en lo que se entiende existe un consenso general, se está dispuesto a buscar soluciones alternativas que permitan una reducción del déficit fiscal inmediato y mantengan un sistema normativo sin fisuras.

ESPECIFICIDADES Y RESTRICCIONES DEL SERVICIO EXTERIOR

Ingreso

El ingreso al Servicio Exterior de la Nación (SEN) es uno de los procesos de selección de personal más exigentes de la Administración Pública Nacional. El Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), único organismo de selección e incorporación al SEN, creado hace más de medio siglo -el 10 de abril de 1963- realiza desde entonces de forma ininterrumpida un Concurso Público Nacional anual.

Para acceder a este Concurso Público los aspirantes deben ser argentinos nativos o por opción, tener entre 21 y 35 años de edad y poseer título universitario de grado. Además, deben certificar conocimientos en idioma inglés acreditados a nivel internacional. El promedio de edad de ingreso al ISEN es de 27 años.

Cumplidos esos requisitos, los aspirantes a formar parte del SEN deben someterse a una instancia de evaluación escrita y de carácter anónima que comprende un conjunto de exámenes que abarcan temáticas referidas a Derecho Internacional Público, Historia Política y Económica Argentina, Historia de las Relaciones Políticas y Económicas Internacionales, Principios de Economía y Comercio Internacional, Teoría Política, Derecho Constitucional, Conocimientos de la Realidad Nacional e Internacional. Los concursantes también deben superar una evaluación psicológica y un coloquio final de “aptitud diplomática”.

Con el fin de facilitar la federalización del Servicio Exterior de la Nación los mencionados exámenes escritos se toman al mismo tiempo en nueve sedes: Capital Federal, Córdoba, Mendoza, Rosario, Resistencia, Tucumán, Rio Gallegos, Santa Fe y Mar del Plata.

Aquellos aspirantes que obtengan un promedio mínimo de 7 puntos en los exámenes escritos y hayan superado la evaluación psicológica y el coloquio final, integran el orden de mérito donde quedan seleccionados los ingresantes hasta cubrir el cupo anual fijado con antelación (actualmente 25 candidatos). En el ISEN deberán cursar, con dedicación exclusiva, dos años de estudios sobre diferentes temáticas vinculadas a la profesión diplomática, así como profundizar el idioma inglés, e incorporar el portugués, pero aquellos que acreditan el nivel máximo requerido en esos idiomas deben dedicarse a estudiar un tercer idioma dentro de una amplia gama de opciones lingüísticas ofrecidas por el ISEN.

En el año 2016 se presentaron al Concurso Público Nacional un total de 372 candidatos, de los cuales sólo el 7% fue seleccionado para cubrir las 25 vacantes para el período 2017-2018, lo que demuestra la exigencia del concurso público. En la actualidad existe un número creciente de ingresantes nacidos en las provincias respecto a los nacidos en Capital. En el año 2017, de los 25 ingresantes al ISEN, el 48% fueron oriundos de diferentes provincias argentinas. Al mismo tiempo, el 52% de los ingresantes de ese concurso pertenecen al sexo femenino.

Desarrollo

La carrera diplomática está compuesta por 7 rangos jerárquicos. Aquellos que aprueban los cursos dictados por el ISEN ingresan a la carrera con el rango más bajo, Secretario o Cónsul de Tercera Clase, y deberán permanecer en el mismo un mínimo de 3 años para poder ser considerados para el ascenso a la categoría inmediata superior. Lo mismo ocurre para acceder a todas las categorías superiores. El rango siguiente que representa la categoría intermedia es la de Consejero de Embajada, y para poder acceder a ella los Secretarios de Primera deben aprobar un Curso Especial que los habilita a ser elegibles para el ascenso. De ser reprobado en dos oportunidades, quedarán fuera de la carrera.

Los próximos rangos jerárquicos son Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase y de Primera Clase. Los Consejeros que aspiren a acceder al rango de Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase, además de la antigüedad antes mencionada, deben presentar una tesis sobre alguna cuestión de relevancia para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; la determinación sobre la relevancia de la tesis, así como la evaluación y su aprobación recaen en el ISEN. Pasados tres años en la categoría de Ministro de Segunda Clase, el funcionario podrá aspirar a la de Ministro Plenipotenciario de Primera Clase.

La última, y por ende, más alta jerarquía del escalafón del Servicio Exterior de la Nación, es la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. El promedio de tiempo para alcanzar este rango es de 32 años de carrera. Tanto para ascender a Ministro de Segunda, Ministro de Primera como a Embajador, se requiere el acuerdo del Senado de la Nación.

En la actualidad el Cuerpo Activo del SEN cuenta con poco más de mil funcionarios diplomáticos (1.045). En el año 1983, la planta activa contaba con 624 funcionarios. Gran parte de ese incremento se debió, primeramente, a la reincorporación en el año 1984 de 87 funcionarios que habían sido expulsados de la carrera durante el gobierno de facto de 1976-1983. En segundo lugar, el aumento de la planta se dio por la incorporación con rango diplomático de 173 funcionarios pertenecientes al Servicio Económico y Comercial del Ministerio de Economía al Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 1991.

El incremento de funcionarios diplomáticos se correspondió también con el incremento de las sedes en el exterior de la República Argentina, que hoy en día comprenden un total de 159 representaciones. Estas representaciones diplomáticas están compuestas por 89 Embajadas, 29 Consulados Generales, 23 Consulados, 11 Consulados Generales y Centros de Promoción y 7 representaciones argentinas ante Organismos Internacionales y con el aumento de la complejidad, en las últimas tres décadas, de los temas de la agenda internacional.

La gran mayoría de los diplomáticos de carrera están altamente especializados en temas de la agenda internacional, que también tocan temas de la agenda interna de la Argentina. El profesionalismo y la especialización que el Servicio Exterior ofrecen ha contribuido

sustantivamente a la continuidad en la consideración y gestión de muchos de esos temas por parte de las autoridades nacionales, muchos de cuyos funcionarios suelen variar entre administraciones.

Vale la pena destacar que el 75% de la vida laboral del diplomático se desarrolla en el exterior. Al mismo tiempo, más de la mitad de los destinos en el exterior presentan un gran abanico de dificultades relacionadas con insalubridad, peligrosidad, alta contaminación, inestabilidad política y social, lejanía, entre otras. Asimismo, la disponibilidad en el exterior del funcionario diplomático es total, sin limitación horaria.

Por otro lado, el 70% del cuerpo diplomático está casado y el 62% de sus cónyuges poseen título universitario completo, quienes ven sus carreras profesionales interrumpidas cada vez que el funcionario diplomático se desempeña en el exterior, por prohibición expresa de la ley del SEN. Esto implica que los cónyuges pierden derechos previsionales por falta de aportes en el país. Asimismo, los funcionarios diplomáticos se encuentran imposibilitados de percibir cualquier otro tipo de remuneraciones, excepto aquellas percibidas por ejercer la docencia, previa autorización del Ministerio.

Se suma a estas cuestiones que los funcionarios diplomáticos y sus familias deben lidiar con dificultades de diversa intensidad mientras se encuentran en el exterior, entre ellas, la lejanía de los familiares, el impacto del desarraigo en el grupo familiar, la adaptación de los hijos/hijas en el exterior cambiando de idiomas y centros de enseñanza periódicamente, así como su reinserción una vez vueltos al país, y entre otras complejas cuestiones.

Egreso

En la actualidad hay sólo 380 jubilados del Servicio Exterior de la Nación, siendo la mayoría (82%) pertenecientes a los rangos de Embajador y Ministros de Primera y Segunda Clase. Asimismo, los funcionarios jubilados pueden ser nuevamente convocados al servicio activo cuando su experiencia en algún tema específica así sea requerida. Es importante destacar que el número de jubilaciones anuales muestra, consistentemente, una paridad numérica con las cantidades anuales de vacantes del ISEN, imprimiendo un carácter estático en la demografía de la planta diplomática.

Los funcionarios con rango de Ministro pueden permanecer en actividad hasta los 67 años y aquellos con rango de Embajador hasta los 70, realizando así aportes jubilatorios por encima de los 30 años exigidos por la ley jubilatoria especial, contando con aportes jubilatorios promedio de 43 años. Para que el funcionario diplomático pueda jubilarse con un porcentaje del sueldo de una categoría determinada debe permanecer en actividad un mínimo de 4 años en dicha categoría, una exigencia casi totalmente inexistente en los demás regímenes previsionales.

SITUACIÓN A ABRIL 2018

HABERES JUBILATORIOS		84.372.988
PENSIONES		39.104.207
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SEN (ANSES)		123.477.195

APORTE JUBILATORIO (SEN ACTIVOS)	11 %	20.201.987	
CONTRIBUCIÓN JUBILATORIA (MREC)	16 %	29.384.709	
APORTE TOTAL		49.586.697	40%

DIFERENCIAL		73.890.498	60 %
--------------------	--	-------------------	-------------

<p align="center"><u>JUBILACIONES</u></p> <p align="center">LEY N° 22.731</p>	<p align="center">PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LEY DE REGIMEN ESPECIAL DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION</p>
<p>ARTICULO 1° – La presente ley comprende exclusivamente a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación incluidos en las siguientes categorías:</p> <p>A) Embajador extraordinario y plenipotenciario.</p> <p>B) Ministro plenipotenciario de primera clase.</p> <p>C) Ministro plenipotenciario de segunda clase.</p> <p>D) Consejero de Embajada y Cónsul general.</p> <p>E) Secretario de Embajada y Cónsul de primera clase.</p> <p>F) Secretario de Embajada y Cónsul de segunda clase.</p> <p>G) Secretario de Embajada y Cónsul de tercera clase.</p> <p>Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación a que se refiere este artículo, serán aquellos egresados del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, los que hubieren obtenido ese estado diplomático con anterioridad a la existencia de ese Instituto y los funcionarios designados conforme lo determinado en el artículo 5º de la Ley N° 20.957.</p>	<p align="center">NO SE MOFIFICA</p>
<p>ARTICULO 2° – Las jubilaciones de los funcionarios a que se refiere el artículo anterior y las pensiones a sus causahabientes se regirán por las disposiciones de la presente, y en lo no modificado por ésta, por las normas específicas referidas a ellos y por las normas generales establecidas para los agentes de la</p>	<p align="center">NO SE MOFIFICA</p>

Administración pública nacional.	
<p>ARTICULO 3° – Tendrá derecho a que el haber de la jubilación ordinaria se determine en la forma establecida en el artículo siguiente, el funcionario que acredite los requisitos que a continuación se enumeran:</p> <p>a) Tuviere cumplida la edad de sesenta y cinco (65) años, cualquiera fuere su sexo.</p> <p>b) Computare treinta (30) años de servicios, de los cuales quince (15) continuos o veinte (20) discontinuos como mínimo fueren prestados en forma efectiva como funcionario del Servicio Exterior de la Nación. A los fines de este inciso, se incluirán en el cómputo de los servicios cumplidos en forma efectiva en el Servicio Exterior de la Nación aquellos desempeñados en organismos internacionales cuando la designación se efectúe, conforme lo expresado en el artículo 49, inciso e) y artículo 50 de la Ley N° 20.957, solamente para aquellos funcionarios que en la oportunidad de su nombramiento tuvieron la categoría de embajador extraordinario y plenipotenciario de primera o segunda clase.</p>	<p>b) Computare treinta (30) años de servicios, de los cuales VEINTE (20) como mínimo fueren prestados en forma efectiva como funcionario del Servicio Exterior de la Nación en alguno de los cargos enunciados en el artículo 1°. A los fines de este inciso, se incluirán en el cómputo de los servicios cumplidos en forma efectiva en el Servicio Exterior de la Nación aquellos desempeñados en organismos internacionales cuando la designación se efectúe, conforme lo expresado en el artículo 49, inciso e) y artículo 50 de la Ley N° 20.957, solamente para aquellos funcionarios que en la oportunidad de su nombramiento tuvieron la categoría de embajador extraordinario y plenipotenciario de primera o segunda clase.”</p>
<p>ARTICULO 4° – El haber de la jubilación ordinaria será equivalente al ochenta y cinco por ciento (85 %) de la remuneración total asignada a la categoría de mayor jerarquía desempeñada en el Servicio Exterior de la Nación durante un período mínimo de cuatro (4) años continuos o discontinuos.</p>	<p>ARTÍCULO 4°.- El haber de la jubilación ordinaria será equivalente al ochenta y cinco por ciento (85 %) del promedio de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas durante el período de CIENTO VEINTE (120) meses inmediatamente anteriores a la cesación del servicio.</p> <p>Se considerarán únicamente las remuneraciones en moneda argentina que correspondan a las categorías sobre cuyo promedio se determine el haber, en todos los casos como si esas categorías se hubieran desempeñado en el país.”</p>
<p>ARTICULO 5° – El haber de la jubilación por invalidez de los</p>	<p>NO SE MODIFICA</p>

funcionarios mencionados en el artículo 1º que fallecieren o se incapacitaren hallándose en funciones en el Servicio Exterior de la Nación será equivalente al ochenta y cinco por ciento (85 %) de la remuneración total asignada a la categoría que les correspondiere.									
ARTICULO 6º – El haber de las jubilaciones y pensiones a otorgar de conformidad con la presente será móvil. La movilidad se efectuará cada vez que sufra variación la remuneración asignada a la categoría que se tuvo en cuenta para determinar el haber de la jubilación.	<p>ARTÍCULO 6º.- El haber de las jubilaciones y pensiones a otorgar de conformidad con la presente será móvil. La movilidad se efectuará de acuerdo a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 24.241.”</p> <p>ESTA ACTUALIZACION ES 70% INFLACION Y 30% VARIACION R.I.P.T.E.</p>								
ARTICULO 7º – Para establecer el haber de las prestaciones de conformidad con la presente ley, como también su movilidad, se considerará únicamente la remuneración en moneda argentina que corresponda a la categoría sobre cuya base se determine dicho haber, en todos los casos como si tal categoría se hubiera desempeñado en el país.	<p>ARTÍCULO 7º.- El aporte personal correspondiente a los funcionarios mencionados en el artículo 1º será el que rija en el Sistema Integrado Previsional Argentino incrementado de acuerdo a la siguiente escala:</p> <table border="1"> <tr> <td>Desde el año 2019</td><td>2%</td></tr> <tr> <td>Desde el año 2020</td><td>3%</td></tr> <tr> <td>Desde el año 2021</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>Desde el año 2022</td><td>5%</td></tr> </table>	Desde el año 2019	2%	Desde el año 2020	3%	Desde el año 2021	4%	Desde el año 2022	5%
Desde el año 2019	2%								
Desde el año 2020	3%								
Desde el año 2021	4%								
Desde el año 2022	5%								
NO EXISTE	<p>ARTÍCULO 7º Bis.- <i>Fijase una contribución solidaria de SEIS PUNTOS PORCENTUALES (6%) sobre el monto del haber bruto que perciban los beneficiarios de la presente cuyas altas se produzcan a partir del año 2020.</i></p>								
ARTICULO 8º – La prestación de servicios en los destinos considerados como peligrosos o insalubres no será computada doble a los fines de acreditar el requisito de quince (15) años continuos o veinte (20)	<p>ARTÍCULO 8º.- <i>La prestación de servicios en los destinos considerados como peligrosos o insalubres no será computada doble a los fines de acreditar el requisito de VEINTE (20) años en el Servicio Exterior de la Nación, exigido en</i></p>								

discontinuos en el Servicio Exterior de la Nación, exigido en el artículo 3º, inciso b), párrafo primero, ni el establecido en el artículo 4º.	<i>el artículo 3º, inciso b), párrafo primero.</i>
ARTICULO 9º – Las disposiciones de la presente ley no son de aplicación para la obtención y determinación del haber de la jubilación por edad avanzada.	NO SE MODIFICA
ARTICULO 10 – Las jubilaciones de los agentes del Servicio Exterior de la Nación que no reunieren los requisitos establecidos en los artículos 3º incisos a) y b) y 4º, o en su caso en el artículo 5º, y las pensiones a sus causahabientes se regirán por las normas generales establecidas para los agentes de la Administración pública nacional. No podrá acogerse a los beneficios de esta ley quien perciba una prestación previsional de un organismo internacional.	NO SE MODIFICA
ARTICULO 11 – Los haberes de las prestaciones de los agentes mencionados en el artículo 1º, que se jubilaron o se jubilarán por aplicación de leyes vigentes con anterioridad a esta ley, como también las pensiones a sus causahabientes, se reajustarán o determinarán de conformidad con las normas de la presente si se acreditaren los requisitos fijados en los artículos 3º, inciso b), párrafo primero y 4º, o en su caso en el artículo 5º.	NO SE MODIFICA
ARTICULO 12 – Los beneficios de esta ley no alcanzan a los funcionarios que hubieran dejado o dejaren de pertenecer al Servicio Exterior de la Nación por condena criminal por delito doloso o como resultado de un sumario en el que se les aplicó la sanción de cesantía o exoneración por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.	NO SE MODIFICA
ARTICULO 13 – Los funcionarios que hubieren obtenido la jubilación de acuerdo con el régimen de esta ley	NO SE MODIFICA

<p>podrán ser convocados por el Poder Ejecutivo para desempeñar con carácter de carga pública, cargos, funciones o misiones en el Servicio Exterior de la Nación de los cuales no podrán excusarse, salvo razón atendible a juicio del Poder Ejecutivo.</p> <p>El reintegro al servicio activo en forma transitoria o permanente, entraña el derecho a percibir la retribución propia del cargo en el que fueren designados, suspendiéndose, a partir del momento en que les asista ese derecho la liquidación del haber jubilatorio.</p> <p>Los servicios prestados y las remuneraciones percibidas en estas condiciones les serán computables en el momento en que cesen en el desempeño de sus funciones para volver a acogerse a los beneficios de la presente ley.</p>	
<p>ARTICULO 14 – Sustitúyense los artículos 76 y 78 de la Ley N° 20.957 por los siguientes:</p> <p>"Artículo 76. – Los funcionarios del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación que sin alcanzar los límites de edad previstos en el inciso g) del artículo 18 estén en condiciones de obtener el porcentaje máximo del haber de jubilación ordinaria, podrán ser intimados a iniciar los trámites jubilatorios, pudiendo continuar en la prestación de sus servicios hasta que se les acuerde el mencionado beneficio, por un lapso no mayor de seis (6) meses, a cuyo término se los dará por cesados en sus funciones.</p> <p>"Artículo 78. – Los funcionarios retirados en virtud de las disposiciones de la presente ley percibirán del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto un haber de retiro mensual equivalente al</p>	<p>NO SE MODIFICA</p>

<p>dos y medio por ciento (2,5 %) de la retribución correspondiente al funcionario de igual jerarquía en actividad y en la República, por cada año de servicios computables para el retiro.</p> <p>Tal derecho se extenderá hasta que el funcionario esté en condiciones de obtener el porcentaje máximo del haber de jubilación ordinaria, pero no más allá de los setenta (70) años de edad".</p>	
<p>ARTICULO 15 – La presente ley regirá a partir del día siguiente al de su promulgación.</p>	<p>NO SE MOFIFICA</p>
<p>ARTICULO 16 – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.</p>	<p>NO SE MOFIFICA</p>